

## Rechazo internacional a la condena de miembros de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, La Prensa y periodistas independientes de Nicaragua

*Latinoamérica, 24 de marzo de 2022.* Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la farsa jurídica por la cual la justicia nicaragüense ha sentenciado a entre 7 y 13 años de prisión a las personas ex-trabajadoras de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), al gerente general de La Prensa y a periodistas independientes de Nicaragua.

Este miércoles 23 de marzo, Juan Lorenzo Holmann, gerente general del periódico La Prensa, fue declarado culpable del supuesto delito de lavado de dinero. La jueza Nadia Camila Tardecillas, del Juzgado Segundo de Distrito Penal, solicitó una pena de nueve años y cuatro meses de prisión más una multa monetaria. Holmann fue detenido el 14 de agosto cuando la policía allanó dicho medio, el cual en ese momento era el único medio impreso independiente que aún circulaba en el país. Su juicio finalizó este miércoles 23 y su sentencia definitiva será leída el próximo 31 de marzo.

El pasado lunes 21 de marzo el juez Noveno del Distrito de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García declaró culpable y sentenció a ocho años de prisión a la periodista y precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, en su calidad de presidenta de la FVBCH por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, gestión abusiva y falsedad ideológica. Además, debe pagar una multa equivalente a tres veces el monto supuestamente lavado. El juicio se llevó a cabo entre el 3 y el 11 de marzo en el recinto policial “Evaristo Vásquez” -conocido popularmente como “El Chipote”- donde han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes y actos de tortura. La mayoría de personas que permanecen presas por motivos políticos, además, están incomunicadas.

El arbitrario proceso legal no cumplió con ninguna garantía del debido proceso, se desarrolló con la presencia de un intimidatorio contingente policial y con muy limitado tiempo para que los abogados defensores se expresen a favor de sus representados. Entre otras graves irregularidades, pese a que la defensa contaba con múltiples pruebas de su inocencia, el juicio finalizó sin que pudieran presentar 12 cajas que contenían más de 1000 documentos con información fundamental para la defensa de los procesados. Cristiana Chamorro ha permanecido bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio de 2021.

El mismo lunes también se formalizó la sentencia que condena a otros tres extrabajadores de la FVBCH. Marcos Fletes, contador general, y Walter Gómez, financiero, han sido sentenciados a 13 años de cárcel por lavado de dinero, 300 días de multa y el pago de una multa equivalente a tres veces el monto supuestamente lavado. Incluso el conductor, Pedro Vásquez, ha sido condenado a 7 años de prisión por ser cooperador necesario del delito de lavado de dinero.

La justicia nicaragüense, al servicio del régimen autoritario, condenó también a Pedro Joaquín Chamorro, de 70 años y miembro del directorio de La Prensa, y hermano de Cristiana Chamorro, a 9 años de cárcel por el supuesto delito de apropiación y retención indebida, falsificación ideológica y gestión abusiva.

Estos espurios procesos judiciales se suman a las sentencias ya emitidas en semanas anteriores contra Miguel Mendoza, periodista deportivo sentenciado a 9 años de cárcel por expresar sus opiniones en redes sociales. Así como contra Miguel Mora, fundador de 100% Noticias y precandidato presidencial, y Jaime Arellano, comentarista político, ambos condenados a 13 años de prisión, por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos categóricamente estas sentencias y aquellas emitidas contra las demás personas presas políticas detenidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hacemos responsable al Estado de Nicaragua por la vida e integridad de las y los presos de conciencia y exigimos su inmediata liberación, el cese de su criminalización y la revocación de todas las sentencias dictadas en su contra, por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Adicionalmente, las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos del hemisferio, a emitir su más severa condena a la sistemática violación de derechos humanos y a implementar todas las medidas a su alcance para que las personas presas políticas en Nicaragua sean puestas en libertad.

Asimismo, nos sumamos al llamado al Consejo de Derechos Humanos para que, en su próxima resolución sobre Nicaragua, adopte un mecanismo internacional sólido, independiente e imparcial que permita investigar y documentar exhaustivamente las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde abril de 2018, incluyendo las vulneraciones a los derechos de libertad de asociación, expresión y prensa, y sentar las bases para procesos de rendición de cuentas y sanción de todos los responsables.

**Firman:**

AMARC-ALC

Artículo 19

Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo - Abraji

Asociación Nacional de la Prensa Bolivia -ANP

Asociación de Periodistas de El Salvador - APES

Comité por la Libre Expresión - C-Libre

Centro de Archivos y Acceso a la Información - CAinfo

Espacio Público

IFEX-ALC

Instituto de Prensa y Libertad de Expresión- IPLEX

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos



Instituto Demos

Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa -ICLEP

Instituto Prensa y Sociedad - IPYS Perú

Instituto Prensa y Sociedad - IPYS Venezuela

Fundamedios

Foro de Periodismo Argentino - FOPEA

Voces del Sur

## **International organizations condemn conviction of independent journalists, former members of La Prensa, and the Violeta Barrios de Chamorro Foundation in Nicaragua**

*Latin America, 24 March 2022.* We, the undersigned organizations, condemn the judicial farce taking place in Nicaragua where the justice has sentenced independent journalists and former workers for the now-defunct Violeta Barrios de Chamorro Foundation (FVBCH) to between 7 and 13 years in prison.

On Wednesday, March 23, Juan Lorenzo Holmann, general manager of the newspaper La Prensa, was found guilty of the alleged crime of money laundering. Judge Nadia Camila Tardecillas, in the Second Criminal District Court, requested a sentence of nine years and four months in prison plus a monetary fine. Holmann was arrested on August 14 when police raided the media, which at the time was the only independent print media still circulating in the country. His trial ended on Wednesday, March 23rd and his final sentence will be read on March 31st.

On Monday, 21 March, journalist and aspiring presidential candidate, Cristiana Chamorro, was found guilty on charges of money laundering, “abusive management” and “ideological falsehood” by Judge Luden Martín Quiroz in the Ninth Criminal District Court of Managua. The sentence is linked to her tenure as president of the FVBCH. Ms. Chamorro is also set to pay a fine of an amount equivalent to the alleged laundering. The trial took place from 3 to 7 March at the Evaristo Vásquez Police Complex—commonly known as “El Chipote”—where detainees have been subjected to degrading, cruel and inhuman treatment, including acts of torture. In addition, most of the political prisoners in detention at the facility are being held *incommunicado*.

The arbitrary judicial process against Chamorro and other detainees took place in the presence of an intimidating police contingent and failed to provide any guarantees for due process, including the fact that very limited time was given for defense lawyers to submit statements in support of their clients. Among other serious irregularities and despite the fact that the defendants possessed proofs of innocence, the trial came to an end without the presentation of more than 1000 key documents supporting the defendants’ cases. Cristiana Chamorro has been under house arrest since 2 June 2021. The sentence against her has not determined the place where she is to be transferred.

In addition to Chamorro, three other former FVBCH workers were convicted on 21 March. Accountant Marcos Fletes and finance officer Walter Gómez were sentenced to 13 years in prison for money laundering. Fletes is also set to pay a fine of 300 days, and another one equivalent to three times the amount that was allegedly laundered. Even Chamorro’s driver, Pedro Vásquez, was sentenced to 7 years in prison for being an “accomplice in the crime of money laundering”.

The Nicaraguan justice system, in servitude to the authoritarian government, also sentenced Pedro Joaquín Chamorro, Cristiana Chamorro’s 70-year-old brother and a director of the La Prensa newspaper, to nine years in prison on allegations of misappropriation of funds, “ideological falsehood” and “abusive management”.

These spurious legal proceedings came on the heels of similar rulings in previous weeks wherein sports journalist Miguel Mendoza was sentenced to nine years in prison for expressing his opinions on social media, while political commentator Jaime Arellano and 100% Noticias television station founder and former presidential candidate Miguel Mora were both sentenced to 13 years in prison for “disseminating fake news” and conspiring to “undermine national integrity”.

We, the undersigned organizations, categorically denounce these rulings and others that have been issued against political prisoners detained by Daniel Ortega and Rosario Murillo’s regime. We hold the Nicaraguan State responsible for the lives and safety of all prisoners of conscience. We call for their immediate release and an end to the criminalization of their activities, as well as the reversal of all rulings that have been issued against them for merely exercising their right to freedom of expression.

In addition, we call on the international community and regional governments to strongly condemn the systematic violations of human rights taking place in Nicaragua and implement all measures at their disposal to ensure the release of Nicaraguan prisoners of conscience.

Finally, we join in the call for the United Nations Human Rights Council to, in its resolutions regarding Nicaragua, adopt a sound, independent and impartial international mechanism for exhaustively investigating and documenting the serious human rights violations that have taken place in the country since April 2018, in order to provide a foundation for accountability and punishment of all those responsible for the abuses. The rights violations that have been perpetrated include serious infringements on press freedom and the rights to freedom of association and freedom of expression.

### **Signatories,**

AMARC-ALC

Artículo 19

Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo - Abraji

Asociación Nacional de la Prensa Bolivia -ANP

Asociación de Periodistas de El Salvador - APES

Comité por la Libre Expresión - C-Libre

Centro de Archivos y Acceso a la Información - CAinfo

Espacio Público

IFEX-ALC

Instituto de Prensa y Libertad de Expresión- IPLEX

International Institute on Race, Equality and Human Rights



Instituto Demos

Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa -ICLEP

Instituto Prensa y Sociedad - IPYS Perú

Instituto Prensa y Sociedad - IPYS Venezuela

Fundamedios

Foro de Periodismo Argentino - FOPEA

Voces del Sur